



Al contestar cite Radicado 2026-2-002400-022775 Id: 762227  
Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE  
CONSULTA PREVIA  
Destinatario: COMUNIDAD WALINAY  
Fecha: 11-05-2026 15:33:41  
Folios: 5  
Anexos: 7 Documentos electrónicos



Señor

**CARLOS ARTURO BALLESTEROS URIANA**

Autoridad Tradicional Comunidad Indígena Wayúu Walinay

Correo: [comunidadwalinay@gmail.com](mailto:comunidadwalinay@gmail.com)

Riohacha, La Guajira

**Asunto:** Respuesta a traslado por competencia petición Comunidad indígena WALINAY – consulta previa.

**Referencia:** Radicado 2026-1-002400-034273 Id 747686 del 22 de abril de 2026 y radicado 2026-1-002400-033434 id 746226 del 21 de abril de 2026.

Respetado señor Ballesteros, reciba un cordial saludo.

Oficio No. 442036000-1200 -26 – 078

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior recibió, a través de los radicados controldoc numero 2026-1-002400-034273 Id 747686 del 22 de abril de 2026 y 2026-1-002400-033434 id 746226 del 21 de abril de 2026, traslado por competencia de petición por parte del Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la Guajira, mediante la cual solicita lo siguiente:

“(…)

*En ejercicio de las funciones asignadas a esta Procuraduría por la Constitución Política Nacional y por el Decreto 262 de 2000, en especial las funciones de intervención, prevención y control de la gestión en materia ambiental, me permito darle traslado de la copia de la petición recibida en la Procuraduría General de la Nación, suscrita por el señor CARLOS ARTURO BALLESTEROS URIANA, quien en su calidad de autoridad tradicional de la Comunidad Indígena Wayuu Walinay (Lagunita) de Riohacha, informa sobre la ocurrencia de “daños Ambientales”, debido a “las obras de construcción, ampliación e intervención vial que se ejecutan en el área de influencia del Aeropuerto Almirante Padilla, lo cual causa “Violación de derechos territoriales de la vía de acceso a la comunidad indígena Wayuu Walinay, Cementerio Ancestral Wayuu, y accesos a vías que comunican líneas del sur de la Guajira, los cuales son punto de nuestro territorio que hacen partes fundamentales y sagrada en nuestra cultura Wayuu”, por lo cual solicita la suspensión de las obras.”.*

*Agrega el peticionario que (...)“la fecha, la comunidad no ha sido objeto de un proceso real, previo, libre e informado de consulta previa, pese a la afectación directa del territorio, prácticas culturales, sitios sagrados y formas de vida, así mismo de la comunicación de dicha vía de acceso es fundamental y altamente interesante para los habitantes de este sector, ya que garantiza la seguridad vial, regula el tráfico y ordena la movilidad urbana que conecta labores diarias de personas en el sector, lo que esa vía ayuda la reducción de tiempo de aledaño a lugares.”(…) (Se anexa copia de la petición recibida y sus anexos)*



*La anterior remisión se realiza por cuanto que, una vez analizadas las peticiones contenidas en el escrito mencionado se evidencia que la misma aunque no está dirigida a esa Dirección de Autoridad de Consulta Previa, en todo caso dentro del escrito se realizan peticiones que deben ser conocidas y resueltas por esa entidad por ser un tema de su exclusiva competencia.*

*Dentro de este contexto y en el marco de las competencias de esa **Dirección de Autoridad de Consulta Previa**, solicito se proceda a responder lo de su competencia y a informar a esta Procuraduría la respuesta otorgada, las decisiones adoptadas y la posible respuesta que se brinde al peticionario si lo considera pertinente.*

*(...)"*

Conforme a lo requerido, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, solo se pronunciará respecto al derecho fundamental a la consulta previa, acorde a las competencias establecidas en el decreto 2353 de 2019, en los siguientes términos:

## **I. DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA PREVIA.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 7, 40 y 330 de la Constitución Política de Colombia, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación y garantiza la participación de los pueblos indígenas y tribales en las decisiones que puedan afectarlos directamente.

En desarrollo de estos mandatos constitucionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, incorporado mediante la Ley 21 de 1991, establece la obligación de adelantar procesos de consulta previa frente a medidas administrativas o legislativas susceptibles de generar afectación directa.

En el ámbito institucional, es preciso señalar que, el Decreto 2353 de 26 de diciembre de 2019 modificó la estructura del Ministerio del Interior creando en el artículo 4 la **Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa** la cual cumplirá la función entre otras de, *determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas*, competencia que está en cabeza de la Subdirección Técnica de Consulta Previa de esta Autoridad.

Así las cosas, quien pretenda ejecutar un proyecto, obra o actividad, deberá solicitar a este despacho, pronunciamiento sobre la procedencia y oportunidad de la consulta previa, y con base en el análisis de la afectación directa que la expedición de medidas legislativas o administrativas o por la ejecución de proyectos, obras o actividades pueda generar sobre **comunidades étnicas**, este despacho le indicará al interesado mediante un acto



administrativo, si es procedente o no adelantar un proceso de consulta previa con **comunidades étnicas**, se resalta esta última condición como quiera que, para que se haga un estudio de determinación de la procedencia de la **Consulta Previa** se hace necesario certificar o por lo menos presentar prueba si quiera sumaria, que estamos frente a un colectivo **étnico**.

Adicional a lo anterior, podemos mencionar que, el análisis de la procedencia y oportunidad de la consulta previa que se realiza a partir del concepto de afectación directa, supera el concepto de existencia de una comunidad étnica, es decir, este despacho analiza si determinados proyectos o medidas administrativas y legislativas, son susceptibles de ocasionar posibles afectaciones directas sobre una **comunidad étnica** en grado de intensidad tal, que termine por cooptar sus usos y costumbres en detrimento de su identidad étnica y cultural.

Aterrizando al caso que nos atañe, la Corte Constitucional ha definido la afectación directa como:

*“(...) la intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por las comunidades como propias”.*

*“(...) el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica”.*

Que se puede manifestar cuando:

*“(...) (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.”*

Así las cosas, los trámites administrativos contemplados en el artículo 16 A numeral 1 del Decreto 2353 de 2019, que trata sobre la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran, **deben iniciarse previo a la ejecución del proyecto, obra o actividad que se pretende ejecutar, o antes que se pretenda implementar una medida administrativa o legislativa**, con el objetivo de establecer si el proyecto o la medida en cuestión, es



Al contestar cite Radicado 2026-2-002400-022775 Id: 762227  
Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE  
CONSULTA PREVIA  
Destinatario: COMUNIDAD WALINAY  
Fecha: 11-05-2026 15:33:41  
Folios: 5  
Anexos: 7 Documentos electrónicos



susceptible de generar posibles afectaciones directas a **Comunidades Étnicas**, sobre las cuales se deba garantizar el **derecho fundamental a la Consulta Previa**.

Ahora bien, una vez la Subdirección Técnica de esta Autoridad, recibe una solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, procede a realizar el concepto técnico respectivo (estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales), en el cual se determina la procedencia o no de la consulta previa, en razón a que la **comunidad étnica** puede ser susceptible de posibles afectaciones directas derivadas de la ejecución de las actividades del proyecto o por la implementación de una medida administrativa o legislativa, para lo cual, de ser procedente la consulta previa, el ejecutor del proyecto o el responsable de la medida, deberá solicitar el inicio del proceso consultivo ante esta Autoridad.

Posteriormente, esta Dirección coordina el ejercicio del derecho a la consulta previa, garantizando la participación de las comunidades étnicas a través de sus instituciones representativas, de conformidad con las funciones dadas por el Decreto 2353 de 2019.

## II. CASO CONCRETO

Tras realizar una consulta en los sistemas de información de la DANCP, se encontró que mediante el radicado controldoc numero 2025-1-002410-010661 Id Control: 492332 del 14 de febrero de 2026, el señor CARLOS ARTURO BALLESTEROS URIANA en calidad de Autoridad Tradicional Comunidad Indígena Wayúu Walinay, ya había presentado la solicitud objeto de traslado por parte del Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la Guajira, que contiene los mismos hechos, el mismo proyecto y las mismas pretensiones, solicitud a la que se dio respuesta mediante el **oficio con radicado número 2025-2-002410-007688 Id: 507162 del 13 de marzo de 2026**, el cual se adjunta para su conocimiento.

De esta manera damos respuesta a su solicitud, cualquier información adicional será oportunamente atendida.

Cordialmente,

**Pedro Pablo Salas Hernández**

Director de la Autoridad Nacional  
de consulta previa.

Sección Correspondencias  
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46  
Tel: 242 7400. [www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)  
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América

Servicio al Ciudadano  
[servicioalciudadano@mininterior.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co)  
Línea gratuita 01 8000 91 04 03

Página 4 de 5



Al contestar cite Radicado 2026-2-002400-022775 Id: 762227  
Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE  
CONSULTA PREVIA  
Destinatario: COMUNIDAD WALINAY  
Fecha: 11-05-2026 15:33:41  
Folios: 5  
Anexos: 7 Documentos electrónicos



**Anexos:**

- Oficio con radicado número 2025-2-002410-007688 Id: 507162 del 13 de marzo de 2026

Elaboró: José Doria - Abogado Área Jurídica DANCP  
Revisó: Juan Rivera - Abogado Área Jurídica DANCP  
Revisó: Carlos Mario Hoyos Morales - Líder Área Jurídica DANCP  
Aprobó: Pedro Salas - Director de la DANCP

CC. [cvalencia@procuraduria.gov.co](mailto:cvalencia@procuraduria.gov.co)